

2011 / 5 / 18

DOÑA MARÍA-CARMEN LORENTE GRACIA,
SECRETARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA

CERTIFICO: Que en el expediente del recurso de alzada de que se hará expresión,
se dictó la siguiente,

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA

SECCIÓN TERCERA

RESOLUCIÓN NÚM. 4574

PRESIDENTA:
D^a M^a Asunción Erice Echegaray

VOCALES:
D. Jon-Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta
D. Miguel Izu Belloso

En la ciudad de Pamplona, a
once de mayo de dos mil once.

Visto por la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Na-
varra, integrada por los Vocales que
al margen se expresan, el expedien-
te del recurso de alzada número **11-
1612**, interpuesto por **DON RAÚL
OLÓRIZ ESPINAL** contra reso-

lución de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana del **AYUN-
TAMIENTO DE PAMPLONA** de fecha 7 de febrero de 2011, sobre solicitud de
autorización para la instalación de una mesa para recogida de firmas en la vía públi-
ca.

Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por Resolución de 7 de febrero de 2010 (5/SC) de la Concejalía Delegada
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona se autorizó al
recurrente la instalación de una mesa de recogida de firmas el 11 de febrero de 2011
de 18 a 20 horas en la calle Mercaderes, mientras que para el resto de las fechas soli-
citadas con el mismo objeto (18 y 15 de febrero, 4, 11, 18 y 25 de marzo del mismo

año) se le indicaba que *“al igual que se hace con el resto de mesas petitorias y similares, deberá solicitar otras ubicaciones en los barrios de la ciudad”*.

2º.- Contra este acto se interpone por el interesado recurso de alzada ante este Tribunal.

3º.- Mediante providencia del Presidente de este Tribunal se dio traslado del recurso al ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFAL), en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la entidad local.

4º.- Por las partes no se propuso la práctica de prueba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente justifica la interposición del recurso de alzada en que la denegación de la instalación solicitada para el resto de fechas distintas del 11 de febrero de 2011, única autorizada, es arbitraria y no tiene soporte jurídico y que la resolución impugnada no contiene ningún tipo de motivación.

El Ayuntamiento de Pamplona en su informe solicita la desestimación del recurso debido a que la resolución se ajusta a los criterios que aplica habitualmente para casos análogos de autorizaciones de instalación de mesas petitorias o similares en la vía pública por lo que no existe discriminación.

SEGUNDO.- Simplemente de la lectura de la resolución impugnada se deduce que procede la estimación del recurso ya que, como alega el recurrente, carece de la motivación exigida por el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC): *“serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho...”*. La resolución carece por completo de cualquier invocación de los fundamentos de derecho en que se basa para no autorizar lo solicitado e instar del recurrente que busque otras ubicaciones para todas las fechas solicitadas menos para la del 11 de febrero; el único precepto jurídico citado es la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local pero a los solos efectos de la liquidación y abono de dicha tasa, cuestión ajena a este recurso de alzada. Por otro lado, se deduce del expediente que la resolución se dicta sin base en ningún informe de técnico municipal competente o informe jurídico previo que pudiera avalar la denegación de lo solicitado salvo los rituarios vistos bueno del director y del secretario técnico del área formulados mediante las correspondientes firmas en el propio documento que contiene la resolución; firmas cuyo único efecto es constatar que dichos funcionarios están de acuerdo con lo que se resuelve, pero que no arrojan la menor luz sobre sus motivos.

Como señala el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 5 de mayo de 1994 (RJ 1994\3781): *“Lo discrecional no es lo mismo que lo caprichoso, y el mar-*

gen de libertad que la discrecionalidad otorga a la Administración lo sigue teniendo aunque se le imponga la obligación de expresar los motivos de su actuación, deber lógico para que pueda distinguirse entre lo discrecional lícito y lo arbitrario injusto; en la discrecionalidad los motivos lícitos no son controlables, pero han de ser conocidos, justamente para que pueda examinarse si la decisión es fruto de la discrecionalidad razonable o del capricho o humor de los funcionarios; en último extremo, con discrecionalidad o sin ella, la Administración no puede perseguir con su actuación otra cosa que el mejor servicio a los intereses generales -artículo 103.1 de la Constitución Española, y, por lo tanto, debe dejar constancia de las razones que avalan esa finalidad y descartan cualquier otra ilícita". Y el mismo Tribunal Supremo explica en la Sentencia de 9 de julio de 2010 (RJ 2010\6133) lo siguiente: *"Con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de este Tribunal Supremo, cuya reiteración excusa cita, de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada --la asignación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero-- asequible al destinatario de los mismos, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa adoptada. Este conocimiento constituye la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 CE"*. Es decir, la motivación exigible en las resoluciones administrativas es aquella que permite conocer, por los propios interesados y por los órganos administrativos o judiciales que hayan de realizar su control de legalidad, las razones que han conducido a su adopción.

En el presente caso no es posible, con la lectura de la resolución y de sus antecedentes (limitados a la propia solicitud formulada por el recurrente ya que, como hemos dicho, no se contienen en el expediente otros informes o documentos), saber las razones por las cuales el Ayuntamiento considera autorizable la actividad solicitada el 11 de febrero y, en cambio, no la considera procedente en otras fechas distintas; ni tampoco es posible saber por qué se insinúa que en esas otras fechas la misma actividad sí podría resultar autorizable en otras ubicaciones distintas en la propia ciudad.

Cierto es que, una vez interpuesto el presente recurso de alzada, el Ayuntamiento remite a este Tribunal un informe de alegaciones que contiene una serie de razones que fundamentarían, a su entender, la resolución impugnada. Resulta obvio que la motivación de los actos administrativos ha de realizarse en el propio acto o, en su caso, por remisión a informes o documentos que figuren como antecedentes en el expediente administrativo (motivación *in aliunde*), que la motivación no debe diferirse a un momento posterior al dictado del acto. No obstante, la jurisprudencia introduce algunos matices a este principio; en particular, considera que cuando un acto insuficientemente motivado es objeto de un recurso administrativo ante la propia Administración autora del mismo y en la resolución de ese recurso se ofrece una motivación, la irregularidad quedaría corregida. Así, el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de diciembre de 2008 (RJ 2008\7160) hace las siguientes consideraciones:

"El recurso contencioso-administrativo, que inicialmente se dirigía contra el acuerdo originario del Consejo de Ministros por el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión, fue luego ampliado para dirigirlo también contra el acuerdo de 9 de junio de 2006 desestimatorio del recurso de reposición. Y es indu-

dable que en este segundo acuerdo la Administración ofrece datos y explicaciones que desde luego no figuraban en el acto originario.

(...) En definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las carencias de motivación del acuerdo del Consejo de Ministros originario no son aquí determinantes de la invalidez del acto al no haber causado indefensión, entendida ésta en sentido material, pues la representación de la entidad demandante ha demostrado conocer el criterio aplicado por la Administración para realizar la asignación individual; y es precisamente ese criterio el objeto central de impugnación en sus escritos de demanda y de conclusiones, por más que en esos escritos la parte actora aduzca otros argumentos, y, entre, ellos el de la falta de motivación del acto impugnado”.

Como el mismo Tribunal Supremo explica en la ya citada Sentencia de 9 de julio de 2010 (RJ 2010\6133): *“El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 54 de la Ley 30/1992, se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 63.2 de la citada Ley. Ahora bien, esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa”* (el subrayado es nuestro).

En el presente caso hemos de concluir que, efectivamente, se ha producido indefensión. El recurrente no interpuso recurso de reposición sino que acudió en recurso de alzada ante este Tribunal, pero en el momento de interponer este recurso ignoraba las razones por las que su solicitud había sido denegada. No se ha subsanado esa falta de motivación; el informe de alegaciones que el Ayuntamiento dirige a este Tribunal carece de eficacia al respecto pues el recurrente no ha tenido la posibilidad en su recurso de alzada (o en alguno de los otros recursos, de reposición o contencioso-administrativo, que podía interponer optativamente) de utilizar los argumentos que estimara oportunos para defender sus intereses y combatir las razones ofrecidas por el Ayuntamiento. A este respecto, aunque nos hallemos en el procedimiento de un recurso administrativo, la situación no es similar a cuando es la propia Administración autora de un acto impugnado la que resuelve el recurso y puede entonces convalidar la insuficiencia de motivación, sino análoga a la situación que se produce en el recurso contencioso-administrativo, en el cual el órgano judicial ha de anular el acto por falta de motivación ya que se ha producido indefensión en la vía administrativa, sin que las alegaciones que formule la Administración en la vía jurisdiccional tengan poder sanatorio. La misma solución se ofrece en el caso de los tribunales económico-administrativos, el cauce del recurso económico-administrativo no es donde pueda ofrecerse la motivación ausente del acto impugnado, como se plasma en la Sentencia número 1220/2010, de 3 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (JUR 2011\33939): *“El TEAR, de forma correcta, anuló la liquidación por falta de motivación, pero se trató de una anulabilidad, prevista en el art. 63 LRJP, al apreciarse una falta de motivación que había producido indefensión en el sujeto pasivo. De hecho, si tal indefensión no se hubiese producido, ni tan siquiera estaríamos hablando de anulabilidad sino de un vicio subsanable y no invalidante”.*

TERCERO.- Aunque lo expresado en el apartado anterior fundamenta por sí solo la estimación del recurso, procede entrar a examinar también el segundo motivo invocado por el recurrente, que la actuación municipal carece de soporte jurídico ya que no existe ninguna norma que prohíba la concesión de la autorización solicitada o la limite en el sentido decidido por el Ayuntamiento y que por ello resulta arbitraria.

Hemos de señalar que, como acertadamente se califica en la propia resolución impugnada, nos hallamos ante un caso de solicitud de autorización o licencia de un uso común y especial del dominio público, el cual es contemplado en los artículos 121 y 122 de la LFAL y 93 y siguientes del Reglamento de Bienes de las entidades locales de Navarra aprobado por Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

Al no existir una ordenanza municipal específica que reglamente la materia – salvo lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos (Boletín Oficial de Navarra número 61, de 22 de mayo de 2006) que no hace sino reiterar la necesidad de obtener autorización municipal previa para instalar mesas petitorias o similares en la vía pública- hemos de dar aplicación al caso las disposiciones citadas. También resulta de aplicación la disposición general contenida en el artículo 179.2 de la LFAL:

“La intervención de la Administración Local en la actividad privada se ajustará, en todo caso, a los siguientes principios:

- a) Igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.*
- b) Congruencia entre los fines justificativos y los medios de intervención utilizados.*
- c) Elección, de entre los diversos medios admisibles, del más respetuoso con la libertad individual”.*

El Ayuntamiento alega haber establecido criterios para la autorización de actividades en las vías o espacios públicos mediante Resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana de 3 de junio de 2005 (17/PC); hemos de prescindir por completo de dichos criterios, que no se aportan en el expediente remitido a este Tribunal, ya que:

a) Los concejales delegados carecen de competencia para establecer normas reglamentarias, potestad reservada por el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local al Pleno; es por ello que tales criterios no pueden tener otro carácter que el de instrucción o circular interna dirigida a los funcionarios, pero que no vincula a terceros.

b) Aun suponiendo que esos criterios se hubieran aprobado por órgano competente, para convertirse en norma jurídica vinculante debieran haberse publicado.

c) La existencia de una práctica reiterada no es, en sí misma, acreditación ni de la corrección de la actuación municipal ni de lo contrario. En su caso, una serie de actuaciones incorrectas, por más que se repitan y que los interesados no las impugnen, no justifica otras posteriores.

Ateniéndonos, pues, a las normas generales de aplicación ya mencionadas, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 96.1 del citado Reglamento de Bienes: *“Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limita el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación, observándose reglas de publicidad y concurrencia, y si no fuere posible porque todos los interesados hubiesen de reunir las mismas condiciones, se concederán mediante sorteo”.*

El Ayuntamiento en su informe de alegaciones indica que el criterio que aplica a las mesas petitorias “no consolidadas” (concepto no recogido en ninguna norma jurídica) es el de *“restringir e, incluso, prohibir su instalación debido al posible*

compromiso al que puede someterse al ciudadano". Pero en realidad del resto de las alegaciones se deduce que no se prohíben sino que simplemente se limita la autorización a *"una sola fecha para cada actividad"*, lo que explica que se concediera la solicitada por el recurrente para el 11 de febrero, pero para el resto de las fechas se le indicara que solicitara otra ubicación, que a la luz del informe de alegaciones hemos de entender una ubicación distinta para cada fecha, aunque en la resolución impugnada no se precisara tal extremo. Este criterio no resulta conforme a derecho, ya que:

a) La limitación del número de licencias (una por fecha y actividad) exigiría que la concesión se realice por licitación, como se desprende del artículo 96.1 citado. Si la concesión –o denegación– se realiza directamente, habrá de atender a otros criterios distintos.

b) De la relación de actividades autorizadas en la calle Mercaderes durante el año 2010 que el Ayuntamiento une a su informe de alegaciones se desprende que, en realidad, no es ese el criterio aplicado siempre, por lo cual aplicarlo en el caso del recurrente resulta discriminatorio. Figura una autorización para rodaje de una película a la que nos referiremos después y que ocupaba varias fechas; y figura una entidad de defensa de los derechos humanos a la cual se autoriza la instalación de una mesa petitoria ocho veces a lo largo del año. Ciertamente que varía el objeto para el cual se recogen firmas o se ofrece información, pero la actividad a los efectos que aquí nos interesan es la misma, la instalación de una mesa petitoria. No corresponde al Ayuntamiento sino a los solicitantes adoptar las decisiones oportunas en cuanto a si en su actividad van a pedir firmas uno o varios días; o si van a recogerlas con la misma finalidad durante todo el año o van a recogerlas para varias finalidades distintas; o si van a pedir las en el mismo lugar o en varios lugares. Todo ello entra dentro de los derechos que en el marco de un Estado de derecho que, conforme al artículo 1 de la Constitución, tiene entre sus valores superiores la libertad y el pluralismo político, corresponden a los ciudadanos. Las potestades del Ayuntamiento se limitan a denegar las licencias en los casos en que no se ajusten al ordenamiento jurídico; y en este caso los criterios que contempla el ordenamiento no pueden ser otros que los referidos exclusivamente a la protección de los espacios públicos y a su uso ordenado por los ciudadanos a que se refiere la citada Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos en su exposición de motivos: *"Estas pautas de comportamiento cívico han de permitir la libertad de cada uno de los ciudadanos con el límite esencial del respeto a los demás, asumir la preservación del patrimonio urbano y natural, así como del resto de los bienes, y, en conjunto, garantizar la convivencia ciudadana en armonía"*. Quiere ello decir que la potestad municipal para prohibir o limitar las actividades que sean objeto de solicitud de licencia está circunscrita a que esas actividades supongan un deterioro o peligro para los bienes, un perjuicio para terceros que hagan uso de la vía pública, o una alteración de la convivencia.

c) En este sentido, los argumentos que ofrece el informe municipal para justificar la denegación de la autorización para seis de las siete fechas solicitadas no resultan convincentes. Se afirma que la zona es muy transitada, lo cual es una obviedad porque no tendría sentido colocar una mesa petitoria en una zona que no lo fuera. Alude a que se trata de una zona de reducidas dimensiones y que por ello la instalación de la mesa *"en siete fechas diferentes supone un trastorno considerable al uso normal de un espacio público"*. Pero tal afirmación no se sustenta en ningún dato concreto ni informe técnico y resulta un argumento muy endeble. Aunque no figure en el expediente ningún dato al respecto, es notorio que la calle Mercaderes es de uso peatonal, conforme al anexo 1 de la Ordenanza municipal de tráfico de la ciudad de

Pamplona (Boletín Oficial de Navarra número 53, de 4 de mayo de 2009), y ciertamente que como la mayor parte de las calles del Casco Antiguo de Pamplona, de traza medieval, no es una calle de grandes dimensiones, aunque sí de mayor anchura que la mayoría; una simple consulta al Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) acredita que en su parte más ancha alcanza los 20 metros, aproximadamente, que se ven reducidos a unos 5 metros en la parte más estrecha, donde se inicia la calle Curia. Esa forma cuasitriangular hace que la parte más ancha funcione de hecho como una pequeña plaza apta para diversas actividades. Es por ello que debe deducirse que la instalación de una mesa petitoria en tal lugar ha de suponer un trastorno muy poco perceptible de la actividad normal del lugar; hemos de tener en cuenta que dicha mesa según afirma el recurrente puede ocupar unos 3 metros cuadrados (de los 1.000 metros cuadrados que aproximadamente tiene la calle); el propio Ayuntamiento admite tácitamente la escasa envergadura de la instalación cuando para autorizársela el día 11 de febrero no le exige otra documentación que la propia instancia de solicitud. Que ese trastorno es mínimo se deduce tanto del hecho de que el Ayuntamiento autorice la mesa petitoria el día 11 de febrero como que a lo largo del año 2010 haya autorizado la instalación de mesas similares en doce ocasiones, además de otras actividades de las que hay que suponer una mayor ocupación de espacio y una mayor incidencia en el tránsito peatonal. No hay motivo para suponer que la concesión de la autorización para otras seis fechas (otros seis viernes por la tarde, todos ellos laborables, como el 11 de febrero autorizado) genere un trastorno mayor por el simple hecho de reiteración de la actividad.

d) Alude el informe municipal a que *“dicha zona es solicitada por otras personas y entidades para la instalación de mesas, pasacalles, teatro, etc., las cuales tienen el mismo derecho que el recurrente para que, en su caso, se les conceda la autorización pertinente, derecho que quedaría restringido si se concediera autorización para una misma actividad para varias fechas, lo que disminuiría las posibilidades de autorización para otras solicitudes, creando una clara discriminación”*. Tampoco resulta de recibo este argumento, que se desmiente con los propios datos ofrecidos por el Ayuntamiento. En 2010 se autorizaron actividades en la calle Mercaderes sólo en 27 de los 365 días que tiene el año, además de otros en el mes de julio para el rodaje de una película no precisados en el informe municipal pero que a este Tribunal le consta (expediente del recurso de alzada número 10-05592) que fueron tres; no es de suponer que en el año 2011 el número vaya a ser muy diferente. No parece que haya tal aglomeración de personas o colectivos interesados en ser autorizados para ocupar la vía pública en esa calle concreta como para que haya que establecer una limitación como la aplicada por el Ayuntamiento, una por solicitante y actividad; y, en todo caso, si se diera el caso, lo que procedería es que el Ayuntamiento estableciera ese límite por ordenanza o que sometiera la concesión de licencias a licitación, como dispone el Reglamento de Bienes antes citado.

Distinto sería el caso de que para alguna de las fechas solicitadas por el recurrente existiera ya autorizada otra actividad; en ese caso podría justificarse la denegación por las molestias que pueden causarse recíprocamente dos actividades simultáneas en la misma calle, o las molestias que puedan producirse a los vecinos y vianantes. Pero no parece ser el caso; el Ayuntamiento no justifica que existieran esas otras autorizaciones, la argumentación meramente hipotética que realiza en realidad nos reconduce a la defensa del criterio apriorístico de no conceder más que una autorización que ya hemos comentado.

También alude el Ayuntamiento a que *“en dicho lugar se realizan concentraciones, así como el paso de manifestaciones por otro tipo de motivaciones en las que*

la competencia para su autorización corresponde a la Delegación del Gobierno y no al Ayuntamiento de Pamplona". Hemos de reiterar lo dicho; si para alguna de las fechas solicitadas por el recurrente existiera prevista una concentración o manifestación, podría justificarse la denegación. Pero no se acredita que fuera el caso. Si se diera el supuesto de que se autorizara la mesa petitoria u otra actividad y posteriormente se tuviera noticia de la pretensión de celebración de una manifestación o concentración en el mismo lugar, día y hora, conforme al artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, el Ayuntamiento debería informar de ello a la Delegación del Gobierno para que tuviese en cuenta dicha circunstancia; o podría, en su caso, revocar o modificar la autorización concedida. En todo caso, este argumento también carece de consistencia para apoyar el acto aquí impugnado.

Como dice el informe municipal, efectivamente todos tienen el mismo derecho a obtener la autorización municipal; incluido el recurrente. Hemos de recordar la naturaleza de la técnica de la autorización administrativa; como señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de marzo de 2001 (RJ 2001\6609):

"La Jurisprudencia utiliza, inicialmente, un concepto de autorización que se ajusta a la noción clásica de acto administrativo que permite a una persona el ejercicio de un derecho o facultad que le corresponde, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar. Y desde este punto de vista tradicional, la autorización administrativa, en cuanto acto de control preventivo y de carácter meramente declarativo que no transfiere facultades sino que remueve límites a su ejercicio, ha de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia de la más estricta legalidad. Carácter reglado de la autorización que es predicable no sólo del acto mismo de otorgamiento, sino de todos sus aspectos, como son: su contenido, la competencia del órgano otorgante y el procedimiento a seguir.

Esta visión clásica de las autorizaciones se completa con una técnica autorizatoria que no se reduce ya al simple control negativo del ejercicio de derechos, sino que se extiende a la regulación misma de la actividad, con el propósito decidido de orientar y encauzar positivamente la actividad autorizada en el sentido de unos objetivos previa e implícitamente definidos en las normas aplicables. Y, en este sentido, este Alto Tribunal ha señalado que aunque la licencia o autorización administrativa representa una remoción de límites en el ejercicio de un derecho subjetivo del administrado, ello no implica que, una vez removidos tales límites, la Administración se vea desposeída de sus prerrogativas originarias, sino que las conserva por tratarse de una materia en la que la policía ejercitable por los entes públicos está dirigida a la tutela y defensa de fines de interés general, naturalmente presentes en todo momento (Cfr. STS de 16 de junio de 1980)".

La propia resolución contiene un apartado que reza, en relación con la autorización concedida, que *"en todo momento se atenderán las indicaciones de Policía Municipal"*. La concesión de las autorizaciones solicitadas para el resto de las fechas no excluye la adopción de una prescripción igual o similar que garantice poder afrontar, en su caso, los posibles problemas que alega el informe municipal como motivo de no autorización. Pero la denegación sin motivos adecuados y fundamentados en derecho, en este caso, resulta arbitraria y conduce necesariamente a la estimación del recurso.

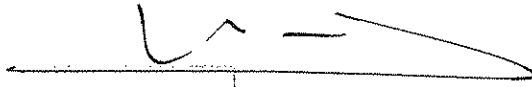
Por todo lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE: Que debe estimar, como estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra Resolución de 7 de febrero de 2010 (5/SC) de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, acto que se anula por no ser ajustado a derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- M^a Asunción Erice.- Jon-Ander Pérez-Ilzarbe.- Miguel Izu.- Certifico.- María-Carmen Lorente, Secretaria.-

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Y para que conste y su remisión a DON RAÚL OLÓRIZ ESPINAL, extendiendo la presente certificación que firmo en Pamplona, a once de mayo de dos mil once.-


DON RAÚL OLÓRIZ ESPINAL
JEFES DE SERVICIO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NAVARRA

